Decreto para la Autorización Inmediata de Inversiones: alcances, procedimiento y efectos jurídicos relevantes / Decree for the Immediate Authorization of Investments

ANÁLISIS

Marco Antonio Gonzalez Reynoso[1]

El 4 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto para la autorización inmediata de inversiones", instrumento de política industrial mediante el cual el Gobierno Federal busca posicionar a México como un destino más competitivo para la inversión extranjera directa, particularmente en el contexto del fenómeno de relocalización productiva (*nearshoring*). El decreto introduce un régimen especial de autorización administrativa orientado a acelerar la implementación de proyectos estratégicos mediante un esquema de acompañamiento institucional centralizado.

El nuevo mecanismo permite el inicio inmediato de proyectos de inversión calificados, con intervención y acompañamiento directo de la Oficina de la Presidencia de la República, sin costo burocrático adicional y sin que ello implique una dispensa o prejuzgamiento respecto del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. Su fundamento jurídico descansa principalmente en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados

On 4 May 2026, the "Decree on the Immediate Authorisation of Investments" was published in the Official Gazette of the Federation. This industrial policy instrument is through which the Federal Government seeks to position Mexico as a more competitive destination for foreign direct investment, particularly in the context of the phenomenon of production relocation (nearshoring). The decree introduces a special administrative authorisation regime aimed at accelerating the implementation of strategic projects through a centralised institutional support scheme.

The new mechanism allows for the immediate commencement of eligible investment projects, with direct intervention and support from the Office of the President of the Republic, without additional bureaucratic costs and without this implying any exemption or prejudgment regarding compliance with applicable legal provisions. Its legal basis rests primarily on Article 89, Section I, of the Political

[1] Maestro en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Corredor Público No. 80 de la Plaza de la Ciudad de México. marco@gonzalezreynoso.com. / Master of Laws (LL.M.) in International Business Law from Universidad Iberoamericana. Master's Degree in Criminal Law from the University of Seville. Public Broker No. 80 for the Mexico City Jurisdiction.

Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El decreto define como inversionista tanto a personas físicas con actividad empresarial como a personas morales, nacionales o extranjeras con establecimiento permanente en México. Asimismo, delimita tres categorías de proyectos susceptibles de acogerse a este régimen: Proyectos en Polos de Desarrollo, Inversiones de gran escala; y Proyectos en sectores estratégicos.

En el caso de los Proyectos en Polos de Desarrollo, el decreto comprende aquellos autorizados para desarrollarse en Polos de Desarrollo para el Bienestar, Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar o Polos de Economía Circular para el Bienestar, conforme a las declaratorias emitidas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o por las secretarías competentes. Por su parte, las Inversiones de gran escala son aquellas cuyo monto sea igual o superior a $2,000,000,000.00 M.N., independientemente del sector económico al que pertenezcan.

Respecto de los sectores estratégicos, el decreto contempla actividades como infraestructura tecnológica, centros de procesamiento de datos, semiconductores y microelectrónica, industria automotriz y de autopartes, dispositivos médicos, farmacéutica y biofarmacéutica, aeroespacial, energética, química, textil y confección, entre otras que el Comité de Inversiones determine como

Constitution of the United Mexican States, as well as on the Organic Law of the Federal Public Administration and the National Law to Eliminate Bureaucratic Procedures.

The decree defines an “Investor” as both individuals engaged in business activities and legal entities, whether domestic or foreign, with a permanent establishment in Mexico. It also sets out three categories of projects eligible for this regime: i) Projects in Development Hubs; ii) Large-scale investments; and iii) Projects in strategic sectors.

In the case of Projects in Development Hubs, the decree covers those authorised for development in Development Hubs for Well-being, Economic Development Hubs for Well-being or Circular Economy Hubs for Well-being, in accordance with the declarations issued by the Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec or by the competent ministries. For their part, large-scale investments are those amounting to $2,000,000,000.00 MXN or more, regardless of the economic sector to which they belong.

With regard to strategic sectors, the decree covers activities such as technological infrastructure, data processing centres, semiconductors and microelectronics, the automotive and auto parts industry, medical devices, pharmaceuticals and biopharmaceuticals, aerospace, energy, chemicals, textiles and clothing, amongst others that the Investment Committee determines to be priorities. However, the scheme expressly excludes projects linked to

prioritarias. Sin embargo, el régimen excluye expresamente proyectos vinculados con actividades mineras, financieras y de inversión pública o mixta. Esta exclusión también aplica para los efectos del artículo Décimo Tercero del decreto, relativo a la afirmativa ficta.

El procedimiento de autorización inicia mediante la presentación de una solicitud a través de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entre los requisitos documentales destacan: formato de solicitud firmado; escritura constitutiva o identificación oficial; Constancia de Situación Fiscal; inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, cuando corresponda; acreditación de propiedad o posesión del inmueble; y un proyecto ejecutivo detallado que incluya cronograma, fuentes de financiamiento, estimación de empleos, consumos energéticos, uso de agua y gas, manejo de residuos peligrosos y estimaciones de emisiones y descargas, entre otros aspectos técnicos.

Adicionalmente, el inversionista deberá presentar una declaración de aplicabilidad y cumplimiento regulatorio bajo protesta de decir verdad, en la que identifique todas las disposiciones legales aplicables al proyecto y los permisos obtenidos o pendientes de tramitar, manifestando expresamente que cumplirá con dichos requisitos durante la vigencia de la autorización. El decreto también exige una carta compromiso de proveeduría local equivalente al menos al 20% del monto total de la

mining, financial, and public or mixed investment activities. This exclusion also applies for the purposes of Article 13 of the decree, relating to the deemed approval.

The authorisation procedure begins with the submission of an application via the National Digital Investment Portal, administered by the Agency for Digital Transformation and Telecommunications. Key documentary requirements include: a signed application form; articles of association or official identification; proof of tax compliance; registration in the National Register of Foreign Investments, where applicable; proof of ownership or possession of the property; and a detailed project proposal including a timetable, sources of funding, estimated employment figures, energy consumption, water and gas usage, hazardous waste management, and estimates of emissions and discharges, amongst other technical aspects.

In addition, the investor must submit a sworn statement of applicability and regulatory compliance, identifying all legal provisions applicable to the project and the permits obtained or pending, expressly stating that they will comply with these requirements for the duration of the authorisation. The decree also requires a letter of commitment to source at least 20% of the total investment locally and a civil liability insurance policy valid for the entire duration of the authorisation.

The authorisation shall be valid for an initial period of one year from the date of issue and may be renewed for up to two further periods of equal

inversión y una póliza de responsabilidad civil vigente durante toda la duración de la autorización.

La autorización tendrá una vigencia inicial de un año a partir de su expedición y podrá renovarse hasta por dos periodos adicionales iguales, siempre que el inversionista acredite al menos el 90% del avance comprometido en cada periodo correspondiente. En consecuencia, el régimen permite una permanencia máxima potencial de tres años.

Durante este periodo, el inversionista deberá presentar reportes trimestrales de avance a través de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y notificar cualquier modificación relevante al proyecto con al menos diez días hábiles de anticipación. El incumplimiento de obligaciones, la entrega de información falsa o la actualización de supuestos previstos por el Comité de Inversiones podrán dar lugar a la revocación de la autorización. Asimismo, la falta de presentación de reportes trimestrales podrá generar su suspensión.

Uno de los aspectos más relevantes del decreto se encuentra en su artículo Décimo Tercero, el cual establece que los trámites relacionados con proyectos de inversión presentados a través de la Ventanilla Digital deberán resolverse por las autoridades federales competentes en un plazo máximo de noventa días hábiles. En caso de no emitirse resolución dentro de dicho plazo, operará una afirmativa ficta, entendiéndose autorizados los trámites correspondientes, salvo en los casos expresamente excluidos. Este mecanismo representa un

duration, provided that the investor demonstrates at least 90% of the progress committed to in each corresponding period. Consequently, the scheme allows for a potential maximum duration of three years.

During this period, the investor must submit quarterly progress reports via the National Digital Investment Portal and notify the authorities of any relevant changes to the project at least ten working days in advance. Failure to comply with obligations, the provision of false information, or the updating of assumptions set out by the Investment Committee may lead to the revocation of the authorisation. Furthermore, failure to submit quarterly reports may result in its suspension.

One of the most significant aspects of the decree is found in Article 13, which stipulates that procedures relating to investment projects submitted via the Digital Portal must be resolved by the competent federal authorities within a maximum of ninety working days. Should no decision be issued within that period, a deemed approval will apply, meaning the relevant procedures are deemed authorised, except in cases expressly excluded. This mechanism represents a significant change to the administrative silence regime applicable to private investment projects and could substantially alter the regulatory landscape in strategic sectors.

The decree also establishes the Investment Committee, a collegiate body comprising the Ministries of Finance and Public Credit; Environment and Natural Resources;

cambio significativo en el régimen de silencio administrativo aplicable a proyectos de inversión privada y podría modificar sustancialmente la dinámica regulatoria en sectores estratégicos.

El decreto también crea el Comité de Inversiones, órgano colegiado integrado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Anticorrupción y Buen Gobierno; así como por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La presidencia del Comité recaerá en la persona designada por el Ejecutivo Federal y contará con voto de calidad en caso de empate.

Por su parte, la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones fungirá como Secretaría Técnica del Comité y tendrá funciones relevantes de verificación documental, acompañamiento institucional, emisión de constancias de autorización y seguimiento de trámites ante dependencias de la Administración Pública Federal.

El Comité de Inversiones deberá instalarse y emitir sus reglas de operación dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, mientras que la Agencia de Transformación Digital contará con treinta días hábiles para emitir el Modelo Nacional de Homologación de Trámites para la Inversión. Asimismo, aquellos inversionistas que ya contaran con acompañamiento de la Secretaría de Economía podrán acogerse a este

Energy; Economy; Anti-Corruption and Good Governance; as well as the Agency for Digital Transformation and Telecommunications. The Committee will be chaired by a person appointed by the Federal Executive and will have a casting vote in the event of a tie.

For its part, the Presidential Office for Investment Promotion will act as the Committee's Technical Secretariat and will have key responsibilities for document verification, institutional support, issuing authorisation certificates, and monitoring procedures with Federal Public Administration bodies.

The Investment Committee must be established and issue its operating rules within thirty calendar days of the decree coming into force, whilst the Digital Transformation Agency will have thirty working days to issue the National Model for the Standardisation of Investment Procedures. Furthermore, investors who are already receiving support from the Ministry of Economy may avail themselves of this scheme until 31 December 2026.

In practical terms, the decree represents a significant opportunity to accelerate investment projects by reducing processing times and centralising procedures on a single digital platform with institutional support. However, the scope and complexity of the required documentation demand particularly rigorous legal, technical and regulatory preparation. Similarly, the civil liability policy—the enforcement of which may be requested directly by the Committee—is a particularly

régimen hasta el 31 de diciembre de 2026.

En términos prácticos, el decreto representa una oportunidad relevante para acelerar proyectos de inversión mediante la reducción de tiempos de gestión y la centralización de trámites en una sola plataforma digital con acompañamiento institucional. No obstante, la amplitud y complejidad de la documentación requerida demandan una preparación jurídica, técnica y regulatoria particularmente rigurosa. De igual manera, la póliza de responsabilidad civil, cuya ejecución puede ser solicitada directamente por el Comité, constituye un elemento de especial relevancia en la estructuración y administración de riesgos del proyecto.

important element in the structuring and management of project risks.